

El torpe hundimiento del bolívar

M. IGNACIO PURROY

Las últimas seis semanas después de aquel "viernes negro" (18 de Febrero), cuando hubo que suspender la venta de divisas, nos han deparado el triste espectáculo de un gobierno torpe e incompetente. La ineptitud del equipo gubernamental a todos los niveles están sumiendo al país en un proceso de profundo deterioro. Dirigentes empresariales han exigido un "gobierno de emergencia", Lusinchi llama al consenso porque el país no aguante ocho meses más esta situación, han circulado incluso rumores "subversivos" de golpe de Estado. Y el desasosiego actual no es nada para lo que podría venir en los próximos meses, cuando el pueblo empiece a sentir el azote de la especulación y del desabastecimiento.

EL VERDADERO Y UNICO RESPONSABLE

Lo más preocupante de todo es la pérdida de confianza en la alta conducción política del país. Hay, ciertamente, individualidades valiosas dentro del gobierno, pero se nota la ausencia de una "jefatura" de Estado con capacidad de entender, coordinar y decidir. La sensación de que la crisis ha desbordado la capacidad de respuesta del gobierno ha hecho desvanecerse esa confianza mínima indispensable para que la sociedad funcione. En tales circunstancias suele imponerse la actitud desintegrante del "sálvese quien pueda", con sus manifestaciones concretas a todos los niveles: corrupción a nivel público, especulación a nivel comercial, estampida de capitales a nivel financiero, desinversión a nivel industrial.

El elemento desencadenante del derrumbe de la confianza ha sido el fracaso rotundo del gobierno en la defensa del bolívar. Analizando los acontecimientos a posteriori, es evidente que el Gobierno nunca estuvo preparado para manejar la crisis; antes bien se vio completamente desbordado por ella, a pesar de que existían recursos y medios más que suficientes para superar la situación, aplicando ciertos correctivos no traumáticos. Sorpresa, improvisación y desconcierto han sido la reacción oficial antes y después del 18 de febrero de 1983.

No pasa de ser una ingenuidad moralizante pretender culpar a los bancos o a las compañías multinacionales de la fuga de capitales, porque su función es precisamente maximizar las ganancias. Y la devaluación les ha reportado las ganancias más fabulosas de su historia. Hay quienes opinan que ha existido connivencia o complicidad de las altas esferas gubernamentales con los sectores financieros internos y externos. Sin embargo, creemos sinceramente que no ha habido tal connivencia, sino más bien ineptitud e ignorancia oficiales, que los intereses devaluacionistas han sabido aprovechar magistralmente, junto con una orquestación perfecta de rumores, involucramiento del principal partido de oposición, etc. Pero este hecho no le exime al Gobierno, en absoluto, de su responsabilidad ante el pueblo venezolano. Y dentro del gobierno la responsabilidad última le corresponde a la jefatura de Estado, a la que aparentemente la conducción del país se le ha ido de las manos.

LA ANSIADA REACTIVACION

¿Tendremos ahora, al menos, la tan ansiada reactivación económica? Desde hace tres años el país está a la espera de ella, pero diferentes motivos la han venido posponiendo. Primero fue la necesidad de enfriar la economía, después la lucha contra la inflación y últimamente la fuga de capitales. Ahora, al cerrar las compuertas de la salida de divisas y estando en un año electoral, parecía llegado el momento. De hecho, ésta fue la condición impuesta por el candidato presidencial copeyano para brindar su apoyo a las medidas cambiarias.

El momento psicológico era además excelente, ya que un conjunto de medidas eficaces, rápidas y coherentes hubiera hecho regresar buena parte de los capitales fugados, devolviendo a los inversionistas y consumidores la confianza perdida y la sensación de que existía un gobierno. Pero está sucediendo todo lo contrario. Los miles de millones de dólares siguen a la expectativa en el exterior. Los industriales y comerciantes están prácticamente en "huelga" de inversiones, en vista de la persistente indefini-

ción de la política cambiaria y económica en general. En vez de planificar inversiones productivas y necesarias reorientaciones de sus actividades a mediano y largo plazo, todos parecen estar abocados únicamente a estudiar la mejor forma de colocarse en la cresta de la ola especulativa que se avecina.

Aun en el supuesto improbable de que el gobierno sea capaz de poner en marcha un paquete de medidas reactivadoras, dudamos que se logre el efecto pretendido. A fines de marzo, por ejemplo, los excedentes de liquidez del sistema bancario han alcanzado niveles altísimos, pero los sectores productivos privados **no quieren invertir**; ni aun facilitándoles los créditos para ello. En el sector de la construcción de viviendas, por ejemplo, el único interés es terminar las obras iniciadas y colocar la viviendas "frías". No se piensa en acometer nuevos proyectos, porque el riesgo de que vuelvan a paralizarse las obras y las ventas por falta de liquidez o por vuelcos en la política oficial es demasiado alto. El sector industrial se limitará a darle mayor utilización a sus capacidades ociosas, pero no hay intención de iniciar nuevos proyectos industriales para aprovechar las líneas de sustitución de importaciones, que se abrirán al prohibirse la importación de una larga lista de productos.

Precisamente esta posibilidad de un nuevo impulso a la industrialización sustitutiva podría ser el gran efecto positivo de la crisis cambiaria. Por eso resulta tanto más preocupante la actitud generalizada de inhibición empresarial en relación a nuevas inversiones, ya que parece ser que sufriremos los impactos negativos de la devaluación, pero no disfrutaremos de sus posibles efectos positivos.

LAS CONTRADICCIONES DEL EQUIPO ECONOMICO

Una de las principales causas de este deterioro ha sido la incoherencia de la conducción económica durante los últimos años. El país ha tenido dos filosofías económicas y organismos rectores, que han trabajado independientemente y, con demasiada frecuencia, en sentidos opuestos. Se ha mezclado la

filosofía neo-liberal del libre mercado y de las terapias monetaristas con la filosofía tradicional del Estado interventor y de la economía subvencionada. Este híbrido filosófico ha sido el causante de tantas medidas incompletas, marchas atrás, virajes bruscos, etc. Para botón de muestra baste recordar la historia de la política de liberación de precios.

Cuando el gran capital, y dentro de él principalmente las compañías multinacionales y la banca extranjera, se dio cuenta de esta incoherencia y constató la ineptitud gubernamental para adaptarse al nuevo contexto petrolero, comenzó a retirar su confianza en Venezuela, y desencadenó la fuga masiva de capitales. La última expresión de la incoherencia oficial se hizo patente con motivo de la adopción de las medidas cambiarias. Aparte del acostumbrado retardo y torpeza en captar el problema, volvieron a aflorar las dos filosofías económicas. Leopoldo Díaz Bruzual (BCV) defendió la tesis monetarista (neo-liberal) de una devaluación pura y simple. Al colocar el valor del dólar en 8 o 9 bolívares para todos los renglones se conseguiría el doble efecto de incentivar el retorno de las divisas fugadas y desincentivar las salidas tanto por la vía de las importaciones de bienes y servicios como por la vía de las transacciones puramente financieras. En el fondo de esta posición yace la argumentación de que la única vía para eliminar los desequilibrios es a través de la fuerza natural del mercado.

No hay duda de que ésta sería la política teóricamente más efectiva para restablecer el equilibrio cambiario; pero sus costos sociales, políticos y económicos serían enormes. El país debería estar dispuesto a soportar tasas de inflación y desempleo elevadísimas. Precisamente para evitar esos enormes costos surgió dentro del gobierno la tesis de la "devaluación administrada", la cual se enmarca dentro de la filosofía keynesiana del Estado intervencionista, que con subsidios y acciones directas busca mantener niveles adecuados de inflación y empleo. Se trata de escalar y diferenciar la devaluación con el fin de aminorar el impacto inflacionario sobre los bienes de consumo esencial. Al facilitar a determinados renglones divisas al cambio preferencial, se les está otorgando en el fondo un subsidio.

EL DOLAR PREFERENCIAL:

UNA NUEVA FORMA DE SUBSIDIO

Los coqueteos neo-liberales del gobierno, que había venido eliminando

los subsidios, han quedado barridos con la implantación del sistema de cambios preferenciales, una modalidad mucho más profunda y cuantiosa de subsidios. En efecto, si el valor "real" del dólar se sitúa, digamos, en 7 bolívares, por cada dólar de maíz que se importe o por cada dólar de deuda externa que se amortice al cambio preferencial de Bs. 4,30, se le está otorgando un subsidio de Bs. 2,70. Suponiendo que el 40 por ciento de las divisas salgan al cambio de Bs. 4,30, otro 40 por ciento al cambio de Bs. 6 y suponiendo que los egresos totales de divisas estén del orden de Iso 24.000 millones de dólares para 1983, llegamos a la impresionante conclusión de que se estaría otorgando un subsidio de 35.520 millones de bolívares. Frente a esta cifra, los tan criticados subsidios de fines de la administración de Carlos Andrés Pérez y comienzos de ésta, que en su momento alcanzaron un máximo de aproximadamente 9.000 millones de bolívares, aparecen ahora como cantidades ridículas.

¿Quiénes van a ser ahora los nuevos beneficiarios? En primer lugar el sector público, que podrá seguir gastando alegremente dólares a 4,30. En segundo lugar, el sector financiero, a quien se le ha reconocido el saldo de su deuda externa al cambio preferencial. En tercer lugar el comercio importador, que, a pesar de importar mercancías al cambio preferencial, aprovechará el clima inflacionario para incrementar sus

precios. Y en cuarto lugar, aunque en menor grado por lo anteriormente expuesto, los consumidores de bienes esenciales, para quienes se pretende aminorar el impacto inflacionario con ayuda de dólares preferenciales.

Con la nueva política cambiaria, por consiguiente, el subsidio va a convertirse en el eje estructural de la economía. En efecto, el aparato productivo y distributivo buscará reestructurarse en función de un mayor aprovechamiento del subsidio. El sector comercial se orientará aún más hacia la importación, y específicamente hacia los renglones subsidiados. Los sectores industriales y agrícolas tendrán que abandonar buena parte de los renglones esenciales a causa de la competencia "desleal" de las importaciones subsidiadas y atenderán más bien renglones no esenciales de prohibida importación.

Una vez más será el petróleo, único generador de dólares, quien soporte el peso del subsidio. De hecho, la economía venezolana viene siendo subsidiada por el petróleo desde hace más de cuarenta años. La tesis de la sobrevaluación histórica del bolívar descansa precisamente en el hecho de que el sector petrolero de alta productividad ha venido compensando ("subsidiando") la ineficiencia del resto de los sectores productivos internos. La fortaleza del bolívar no era ficticia, porque descansaba en la alta productividad del sector petrolero, pero no se correspondía con el bajo nivel de productividad de la economía interna.

Lo grave de la nueva situación es que las perspectivas del mercado petrolero no le van a permitir al país soportar tan enorme peso. Y por otra parte, las dislocaciones productivas generadas por la "subsidiación" intensiva de la economía, harán que ésta se derrumbe bajo el peso de su propia ineficiencia y artificialidad.

PERSPECTIVAS DE LA INFLACION

Volviendo a las repercusiones de la crisis cambiaria, la gran interrogante se refiere al futuro de la inflación. En una economía como la venezolana, cuyo abastecimiento depende en tan alto grado de las importaciones, la devaluación de la moneda tendrá efectos alcistas inmediatos sobre los precios. En los productos importados de consumo final el efecto será directo. En los productos nacionales el efecto será indirecto a través del encarecimiento de los insumos de producción importados. Adicionalmente a estos impactos directos e indi-



rectos se producirá presión sobre los precios por razones de escasez y acaparamiento, ya que las cantidades importables estarán limitadas por cupos. Por otra parte, la tardanza en la definición de las medidas cambiarias y, en un futuro, las complicaciones burocráticas para la obtención de divisas serán otro factor generador de escasez. Finalmente, el clima psicológico es ahora más propicio para el desbordamiento de las tradicionales actitudes especulativas.

A corto plazo, la congelación de precios y los controles represarán las tensiones alcistas. Pero a mediano y largo plazo, sólo el éxito del gobierno en estabilizar la economía y propiciar un clima de inversión podrán detener la erosión de la capacidad adquisitiva del bolívar. De lo contrario, las presiones acumuladas reventarán provocando una inflación galopante. No estamos siendo tremendistas, sino contemplando una posibilidad muy real, a la vista del pésimo desempeño del gobierno en la tarea de restaurar un sano clima económico. Desde ya podemos vaticinar que la inflación puede oscilar para 1983 entre un 20 y un 30 por ciento, con expectativas cercanas al 40 por ciento para 1984. Es triste ver cómo el esfuerzo de tres años para rebajar la tasa inflacionaria de 22 por ciento a un 10 por ciento, logrado con el sacrificio de la masa laboral y a costa del desempleo de muchos venezolanos, es barrido de un manotazo por la ineptitud de un gobierno en la defensa de su moneda.

EL FUTURO DE LA PARIDAD DEL BOLIVAR

En última instancia, la paridad de la moneda es el termómetro de la salud de una economía y la determinante del nivel de inflación. La gran incógnita, por consiguiente, es el futuro del bolívar. Así como defendíamos antes la tesis de la estabilidad del bolívar, siempre y cuando se tomasen las medidas oportunas en su defensa, así también opinamos ahora, una vez perdida la primera batalla, que existe la posibilidad de frenar su deterioro y estabilizar la paridad en un nivel razonable alrededor de los 6 bolívares por dólar. Sin embargo, al margen de esta posibilidad teórica, nos sentimos hoy mucho más pesimistas respecto a la capacidad de los conductores del país para transformar esa posibilidad teórica en una realidad.

Una vez más, no se están tomando las medidas oportunas. No se está aprovechando la extraordinaria oportunidad de generar una sana reactivación econó-

mica, combinando la restricción de importaciones con una política industrial sustitutiva y una política agrícola de auto-abastecimiento. No se ha aprovechado el excelente momento psicológico para aprobar a fines de marzo un presupuesto 1983, que fuera el primer paso valiente hacia la necesaria reforma fiscal y del sector público. Se está cediendo de tal forma a las presiones en pro de la concesión de dólares preferenciales, que volverán a peligrar las reservas de divisas del país.

Otro grave atentado contra la estabilidad del bolívar ha sido la instauración de un mercado libre de divisas a través de la Bolsa de Valores. Ese mercado sólo servirá para distorsionar la paridad del bolívar. En la Bolsa se está negociando menos del cinco por ciento del volumen diario de divisas del país, razón por la cual, el precio ahí establecido no puede ser representativo. El precio también se ve distorsionado por el hecho de que gran parte de las transacciones tiene mero carácter especulativo, pasando los mismos dólares de mano en mano día tras día. Y las transacciones de carácter comercial están casi todas signadas por la premura de los compradores, lo cual eleva la cotización. La Bolsa de Valores sólo servirá para someter al bolívar a constantes vaivenes especulativos y mantener los niveles de precios de los bienes y servicios internos en una permanente incertidumbre e inestabilidad. Querámoslo o no, la economía venezolana está atada al dólar y los aires de inestabilidad provenientes de la Bolsa le están causando daños incalculables.

Frente a este panorama de omisiones y errores, cualquier cosa le puede suceder a la paridad del bolívar... Hasta una devaluación de un 300 por ciento.

HAY RAZONES PARA EL PESIMISMO

Empezamos a pensar que Venezuela necesita una crisis muy profunda para que la actual dirigencia reaccione por instinto de sobrevivencia y acometa las necesarias reformas. De no hacerlo, la misma crisis se encargará de sustituir esa dirigencia.

Dentro de esas reformas, la principal y verdaderamente importante es la reforma del Estado, de sus funciones, de sus gastos (reforma fiscal) y de sus ingresos (reforma tributaria). En el Balance Económico de 1982 (Ver SIC, No. 451, Enero 1983, pg. 16) decíamos que el país había podido afrontar la crisis fiscal y monetaria utilizando fondos de reser-

va como los de PDVSA y del Banco Central, pero que una vez agotadas esas reservas, la única solución real era una profunda reforma fiscal y tributaria, la cual se había convertido ya en una cuestión de sobrevivencia del sistema.

La aprobación del presupuesto para 1983 a fines de marzo nos ha deparado una gran decepción. Ninguno de los dos partidos mayoritarios ha planteado rectificaciones fundamentales, ni siquiera a modo de gesto simbólico.

Aun cuando nos parece loable la actitud del ministro Sosa de no dejarse presionar por la banca internacional, no tiene base el optimismo que pretende infundir. Tienen motivos sobrados la banca extranjera y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para exigirle a Venezuela medidas drásticas de austeridad. O el país acomete sus propias reformas, o el FMI le acabará imponiendo draconianamente sus dolorosas recetas. Llegado ese momento, la culpa no será del "malo" del FMI, sino de la inercia de la dirigencia nacional.

Por parte de los poderes económicos privados no son esperables impulsos regeneradores, aparte de algunos manifiestos y remitidos de prensa. El capitalista vernáculo ha nacido y vive alrededor del Estado, y carece por ello de dinamismo autónomo. La iniciativa correspondería, por consiguiente, al sector público, a los partidos políticos y, en última instancia, a la base de poder que los sustenta. Pero mientras sea el poder económico privado quien los sustenta, ¿qué razones podría tener para impulsar las reformas? Queda, entonces, la vía de la crisis convulsiva. Aparentemente harán falta tasas de inflación del más del 50 por ciento, tasas de desempleo de más del 30 por ciento y la quiebra internacional del país para que el poder popular alcance suficiente expresión organizada como para forzar los cambios indispensables. En ese momento, los grupos de poder tradicionales intentarán colocarse, por motivos de sobrevivencia, a la vanguardia reformista. En cualquiera de los casos, ya sea por conveniencia de los poderes tradicionales o por expresión organizada del poder popular, tarde o temprano Venezuela tendrá que experimentar cambios profundos.